

Escala Crítica/Columna diaria

*Un billón 379 mil 645 millones de pesos, en tres sexenios *El costoso experimento de Fox, Calderón y Peña; no repetirlo *Co
n la vida no se juega; la otra necesaria seguridad pública

Víctor M. Sámano Labastida

EL DENOMINADO Seguro Popular nació enfermo. El gobierno de Vicente Fox, caracterizado por una visión empresarial de la administración pública y de sus servicios, acudió en el año 2000 a uno de los más reconocidos especialistas para que se hiciera cargo de la Secretaría de Salud (pública), Julio Frenk Mora. Venía precedido de su prestigio como funcionario de la Organización Mundial de la Salud. A él se debe la iniciativa del Seguro Popular que a la postre resultó un fracaso.

Más que calificar las intenciones, la evidencia son los resultados. En el año 2002 el SP inició con una prueba piloto en cinco estados. En 2003 fue aprobada la Ley General de Salud y para entonces el nuevo mecanismo cubría 24 entidades. Apenas habían transcurrido tres años de su arranque cuando los doctores Gustavo Leal Fernández y René Drucker Colín, también reconocidos especialistas, advirtieron del fracaso y fraude del esquema foxista por fincarse en objetivos financieros y de carácter electoral, pero además como un mecanismo para dismantelar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Se advertía la sombra de la continuada privatización de la atención a la salud pública, conforme al librito de los llamados “Chicago Boys” y “Los Chicos de Harvard”. Al mismo tiempo se fue cerrando la matrícula en las escuelas de medicina y privilegiando el criterio del lucro.

INSTITUCIONES DESAHUCIADAS

EN EL DENOMINADO “periodo neoliberal” los gobiernos iniciaron un proceso de reformas a las instituciones históricas en materia de salud y seguridad social: IMSS, en 1995; Secretaría de Salubridad y Asistencia, en 2004; ISSSTE en 2007. Felipe Calderón que ratificó y dotó de más recursos al Seguro Popular, también estableció un denominado Seguro Médico para una Nueva Generación. Por su parte, Peña Nieto buscó establecer una “integración” de la atención médica, como parte de sus reformas estructurales marcadas por el afán privatizador.

Como telón de fondo fueron creciendo las denuncias por desvío de recursos, un padrón inflado

(el entonces dirigente del PAN en Tabasco, Gonzalo Fócil, acusó en 2007 al ex gobernador Manuel Andrade de haber manipulado el número de beneficiarios para obtener más recursos; es mediático, respondió el aludido); tráfico y desabasto de medicamentos; falta de médicos e instalaciones.

El Seguro Popular no estaba enfermo, se defiende Salomón Chertorivski, quien fue secretario de Salud, con Felipe Calderón y encargado de la organización de ese sistema durante Fox. No resulta extraño: también José Ángel Córdova Villalobos, José Narro y Mercedes Juan se sumaron a las críticas al Instituto Nacional del Bienestar para la Salud (Insabi) impulsado por Andrés Manuel López Obrador.

Como escribió Ricardo Raphael: hay quienes “alimentan con fe absoluta su profecías más catastróficas”, pero prefieren ignorar la evidencia del fracaso ya ocurrido. (El Universal, 13/01/2020)

LA OTRA INSEGURIDAD

CON LA SALUD no se juega, lo sabemos. Quienes tienen a su cargo los antiguos y nuevos esquemas deberán ser muy puntuales y exigentes en su eficiencia. Hasta las cifras son contradictorias. Mientras el Coneval estima que hay unos 20 millones de mexicanos sin acceso a los servicios de salud, reportes basados en datos del INEGI e IMSS indicaban en 2018 que unos 16.3 millones que realizan trabajos subordinados y remunerados, así como casi 30 millones de trabajadores informales, no tenía protección pública a su salud.

Datos de la OCDE apuntan que en México sólo existen sólo 1.5 camas por cada mil habitantes, cuando la media mundial es de 4.7; sólo 2.8 enfermeras(os) por cada mil, frente a 9.0 requeridos y sólo 2.4 médicos de los 3.4 necesarios. El diagnóstico presidencial es mucho más drástico: nos faltan 200 mil médicos y 250 mil especialistas en enfermería. Ya no se diga la infraestructura básica en las poblaciones más alejadas.

En 2016, se informó de la “depuración del padrón” del Seguro Popular: fueron dados de baja un poco más de 2 millones de beneficiarios inexistentes. La lista pasó de 57 millones 110 mil a 54 millones 920 mil beneficiarios.

Entre 2006 y 2017 la PGR había recibido 37 denuncias por el presunto desvío de recursos destinados al sistema. Esto en sólo siete entidades del país. A finales de 2018 se informó que estaban “perdidos” unos 16 mil millones de pesos en el sector utilizados en Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Sonora, Veracruz y Tabasco.

La danza de las cifras no termina. Tan sólo entre 2002 y 2006, durante el gobierno de Vicente Fox, se destinaron al Seguro Popular ¡30 mil millones de pesos! Entre 2007 y 2012, el invento foxista consumió en la administración de Felipe Calderón un total de ¡279 mil 531 millones de pesos! (fuente: Presupuesto SPSS)

La bola de nieve fue creciendo con Peña Nieto al grado tal que, de acuerdo a cálculos de la publicación Eme Equis, en total se asignaron recursos al Seguro Popular por ¡un billón 379 mil 645 millones de pesos!, en tres sexenios. Es, apunta la periodista Vanessa Cisneros “un monto similar a la deuda del Fobaproa...”

AL MARGEN

¿SERÁ el Insabi, Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, la respuesta a la crítica situación de la salud de los mexicanos y del sector? No lo sabemos, pero el Seguro Popular resultó peor el remedio que la enfermedad. Lo que está en juego es la integridad física y la vida de los mexicanos. (vmsamano@hotmail.com)